RECOMENDACIÓN No. 38/2020

Síntesis: Dos personas reclusas en el Centro de Reinserción Social Estatal número 1, manifestaron haber sido detenidas por agentes de la policía municipal y posteriormente torturadas por dichos elementos y por agentes adscritos a la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la investigación realizada, esta Comisión determinó que existen evidencias suficientes para considerar como vulnerados los derechos humanos a la integridad física y psíquica de los quejosos (presunción de inocencia)

Oficio No. 1s.1.116/2020

Expediente Número. AO 357/2018

RECOMENDACIÓN No. 5s.1.038/2020

Visitador Ponente: Lic. Armando Campos Cornelio

Chihuahua, Chih., a 17 de diciembre de 2020

MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-

MTRO. CÉSAR AUGUSTO PENICHE ESPEJEL
FISCAL GENERAL DEL ESTADO.-
PRESENTE.-

Visto el estado que guarda el expediente AO 357/2018, mismo que fue iniciado con motivo de la queja presentada por “A” y “B” ¹ por actos u omisiones que consideraron violatorios de sus derechos humanos, los cuales le atribuyeron a personas servidoras públicas pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua así como de la Fiscalía General del Estado; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4, párrafo tercero, inciso A, de la Constitución Política del Estado de

¹ Por razones de confidencialidad y protección de datos personales, este organismo considera conveniente guardar la reserva de los nombres de algunas de las personas que intervinieron en los hechos, así como otros datos que puedan llevar a su identificación, los cuales se hacen del conocimiento de la autoridad mediante un documento anexo. Lo anterior con fundamento en los artículos 4, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; 8, del Reglamento Interno de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; 3, fracción XXI, 68, fracción VI, 116, párrafos primero y segundo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 6, 7, 16, 17, 18, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 3, 16 y 171, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, y demás aplicables, y de conformidad al Acuerdo de Clasificación de Información que obra dentro del expediente de queja en resolución.

Chihuahua, en relación con los numerales 3 y 6, fracciones I y II de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos así como de los artículos 6 y 12 del Reglamento Interno de esta Comisión, se procede a resolver lo conducente según el estudio de los siguientes:

I.- ANTECEDENTES:

1. Con fecha 11 de julio de 2018 la licenciada Ethel Garza Armendáriz, visitadora de este organismo derecho humanista, elaboró un acta circunstanciada en sede del Centro de Reinserción Social Estatal número 1 ubicado en el kilómetro 7.5 del Periférico Lombardo Toledano, poblado de San Guillermo, municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua por petición del licenciado Ramón Gerardo Holguín Licón, juez presidente del Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Morelos, quien dentro de la causa penal “D” relativa al juicio oral “E”, solicitó a esta Comisión que se entrevistara a “A”, ya que éste afirmó dentro del mencionado juicio haber sido torturado por las autoridades que lo detuvieron, asentándose las manifestaciones de “A” en la siguiente forma:

“...el día 17 de junio del año 2017, aproximadamente a las doce con treinta minutos fui detenido por agentes de la Policía Municipal en la colonia “P” sin recordar el nombre de la calle donde sucedieron los hechos, esto por varios agentes que me llevaron a la CEDIPOL, me golpearon al momento de la detención en el piso con las manos, me dieron puntapiés, con el arma larga me golpearon en las piernas, costados, espalda, brazos, abdomen, testículos. En la audiencia que tuve con la Jueza, ésta solicitó la aplicación del Protocolo de Estambul, ya me la hicieron y salió a mi favor, ya que recibí bastantes golpes; cuando me pusieron a disposición de Fiscalía me pasaron a la Unidad de Homicidios, y como querían que declarara, me golpearon en un cuarto que tenía una mesa redonda, esto entre cuatro personas, querían que les dijera lo que sabía en relación a un homicidio, sin saber de qué me hablaban, me dieron una

hoja con lo que debía decir al momento en que me grabaran, me hicieron declarar a fuerzas y cuando declaré, ahí me dejaron de golpear. Los agentes ministeriales y municipales me tomaron fotografías en la CEDIPOL y me hicieron amenazas para mi familia, había un agente vestido de camuflaje como si fuera militar y él me puso un cuchillo en la garganta; tanto en la Fiscalía como en la CEDIPOL me pusieron bolsas en la cabeza y un trapo mojado en la cara...”. (Sic).

2. Con fecha 11 de julio de 2018, se recibió la queja de “B”, documentada en el acta circunstanciada de esa misma fecha, misma que fue recabada por la licenciada Ethel Garza Armendáriz, visitadora de este organismo, lo cual realizó en el referido Centro de Reinserción Social Estatal número 1, a petición de la autoridad judicial citada en el párrafo anterior, asentándose las manifestaciones del quejoso en la siguiente forma:

“...deseo manifestar que el día 17 de junio del año 2017, aproximadamente a las trece horas con treinta minutos fui detenido por agentes de la Policía Municipal en la colonia “P”, los cuales me sometieron, me esposaron y me llevaron a la CEDIPOL; ahí me pusieron uno o dos golpes leves, de ahí me pasaron a Previas a la Unidad de Homicidios, a la de Vehículos Robados y a la Unidad de Antisecuestros; los de Antisecuestros me golpearon porque decían que yo había secuestrado a unas personas para quitarles una camioneta Cheyenne 2007 blanca, me dijeron que me habían visto en “Q” en esa camioneta y los de la Unidad de Robo de Vehículos querían que entregara la unidad, terminé todo golpeado en el estómago, espalda, brazos, cuello, cabeza y pierna izquierda, me pusieron una bolsa de plástico en la cabeza con el fin de asfixiarme; quiero manifestar que ya me aplicaron el Protocolo de Estambul, todo salió resuelto a mi favor, con alto grado de tortura, me imputan varios delitos, entre ellos

secuestro exprés, robo agravado y posesión de vehículo robado, todos los golpes que recibí fue por agentes de la Fiscalía, aquí en el CERESO no he sido maltratado...”. (Sic).

3. En vía de informe, mediante oficio RAMP/DH0061/2018 recibido el 01 de agosto de 2018 en este organismo derecho humanista, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, por conducto de la licenciada Bianca Luz Guadalupe Nevárez Moreno, jefa del Departamento Jurídico de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, rindió el informe de ley, negando los hechos imputados, manifestando medularmente lo siguiente:

“... Primero.- Me permito informarle que la detención de los internos “A” y “B” se debió a que incurrieron en una conducta flagrante descrita como delito bajo el rubro de homicidio, fundamentado en el artículo 123 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, así como el de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, fundamentado en el artículo 8 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, esto en menoscabo de la vida de cuatro personas.

Segundo.- Con el fin de informar sobre los pormenores de la detención en la que se han visto involucrados “A” y “B” se anexa copia simple de:

Antecedentes policiales de “A” y “B”.

Informe policial homologado con número de folio JCZN585.

Certificados médicos de entrada y salida.

Calificación del Juez.

Nota periodística.

Reporte de llamada con número de folio 1901.01752511.

Precisado lo anterior, conforme lo señalan los numerales 3, 6, 33 y 36 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos,

seguidamente a la contestación de las respuestas hechas con antelación en tiempo y forma me permito rendir el siguiente:

Informe:

Antecedentes del asunto:

A).- El Visitador adscrito a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos remite copia de la queja presentada por los internos "A" y "B", que a la letra dicen...

... B).- En relación a las circunstancias de la detención de los internos "A" y "B" se anexa copia simple del informe policial homologado, el cual literalmente contiene: "... Me permito informar que siendo las 12:30 horas del día 17 de junio del 2017 el suscrito agente de seguridad pública "QQ" y "T" nos encontrábamos en la caseta del deportivo CEDIPOL ubicado en las calles Paseos del Real entre Avenida Imperio y Plaza de Orda de la colonia Jardines del Sol, cuando de pronto se escuchan varias detonaciones de arma de fuego, motivo por el cual salimos al exterior de las instalaciones percatándonos de dos vehículos que se encontraban a una cuadra de distancia hacia el norte con las puertas abiertas siendo estos vehículos una pick up Chevrolet color verde y otra pick up color blanco, la cual traía polarizado color oscuro, rines negros y placas foráneas, observamos tres personas las cuales se encontraban debajo de los vehículos, es decir en la calle, dos de ellas estaban disparando en contra de una persona del sexo masculino, al observar a éste se encontraba de pie y a consecuencia de las heridas producidas por los proyectiles de arma de fuego quedó detenido en posición de cúbito ventral, la media filiación de estas dos personas, es decir, las que dispararon era de una de ellas aproximadamente de dos metros de altura, robusto, moreno claro y el otro de estatura aproximada de uno ochenta, compleción regular, ambos con

pantalón de mezclilla y playera casual, en cuanto a la tercera persona que se encontraba a una distancia de dos metros de los sujetos armados, su media filiación es de complexión delgada, de tez clara y de apariencia joven, entonces nosotros en esos momentos abordamos la unidad “R”, dirigiéndonos hacia ellos con las medidas de seguridad, en esos momentos ellos al vernos dos de ellos abordan la pick up color verde y le hacen señas a la otra persona para que se retirara del lugar indicando con la mano hacia el lado izquierdo, entonces nosotros empezamos la persecución, adelante iba la camioneta de color blanco y atrás la de color verde, de la cual como a una cuadra de distancia, la camioneta blanca gira hacia el lado izquierdo y la camioneta verde hacia el lado derecho por la calle “S” dándole seguimiento el suscrito y “T” a ésta y en esos momentos siendo las 12:32 aproximadamente damos aviso vía radio que la otra camioneta de color blanco había huido hacia el lado izquierdo en la calle “S” con rumbo hacia la carretera “U”, fue realizado el llamado para el apoyo correspondiente y realizar su búsqueda, nosotros damos vuelta a la derecha en persecución de la camioneta verde en la misma calle, es decir, “S”, la cual a la altura de la Avenida “V”, corta hacia la izquierda siguiéndola con rumbo al norte, en esos momentos el helicóptero de seguridad pública llega en apoyo en la persecución siguiendo la pick up a la altura del acceso “W” donde gira hacia la izquierda rumbo a la carretera “U”, coordinándonos con “X”, quien es observador aéreo, el cual nos indicaba los movimientos que observaba al interior del vehículo, diciendo observar a dos personas en trayecto de la calle “W”, se nos une el apoyo de varios agentes, siendo la patrulla “Y” a cargo de “Z”, la unidad “AA” a cargo de “BB”, unidad “CC” a cargo de “DD”, la unidad “EE” a cargo de “FF” y la unidad “GG” a cargo de “HH”; continuando con la persecución nos indica vía radio el observador aéreo que los ocupantes de la pick up verde habían

arrojado un bulto en la calle "W" y lateral "LL" de la colonia "P", en dicho lugar quedó el policía "BB", para la ubicación de dicho bulto y a la altura de la calle "JJ", la pick up verde da vuelta a la izquierda, todo este trayecto sin perderla de vista, íbamos a una distancia de 100 metros y el helicóptero a un lado de la parte de arriba llegando al cruce de la calle "KK", la pick up verde detiene su marcha descendiendo los tripulantes para emprender la huida a pie, del lado del piloto era una persona como de dos metros el cual huye a la izquierda, siendo alcanzado por el agente "T", por lo cual es asegurado, y la otra persona huyendo hacia el lado derecho, dándole alcance diverso agente de nombre "BB", por lo cual es asegurado. Vía radio nos informa el agente primer respondiente de nombre "MM", quien se constituyó en el lugar de escena fallecieron cuatro personas, tres a bordo de un vehículo Neón de color blanco y la persona que nosotros observamos que quedó tendido en posición de cúbito ventral en la calle "NN", por lo cual la persona detenida por el agente "T" dijo responder al nombre de "B", por lo que se procede a su detención en los términos de la flagrancia por los delitos de homicidio en perjuicio de cuatro personas y portación de arma de fuego, previa lectura de derechos, siendo las 12:50 horas. En relación al diverso detenido quien dijo llamarse "A", asegurado por "BB", por lo cual es detenido por los términos de la flagrancia por los delitos de homicidio en perjuicio de cuatro personas y portación de arma de fuego, previa lectura de sus derechos a las 12:52 horas. En el lugar se asegura el vehículo pick up de color verde, la cual es resguardada por la agente "HH" y "FF", una vez que es procesada por parte de servicios periciales, el licenciado "LL" asegura las evidencias de interés criminalístico y procede a su respectivo aseguramiento, teniendo ambos agentes la evidencia visible un cargador calibre 7.62 x 39 abastecido, así como una bolsa tipo mariconera color café. Cabe señalar que vía radio se nos informa

que en relación al vehículo color blanco con las características ya mencionadas líneas arriba, el cual es localizado por los agentes de seguridad pública de nombre "OO" y "PP", en la calle "F", logrando la detención de una persona, quien responde al nombre de "C" de 23 años, por su probable participación en los hechos delictivos del delito de homicidio. Cabe mencionar que desde un inicio la persecución en contra de los agresores que ocupaban la camioneta verde no se perdió de vista hasta la detención de los probables responsables, siendo las mismas personas quienes realizaron los disparos en contra de la persona del sexo masculino que perdió la vida, el cual quedó en la calle, y de las tres personas fallecidas a bordo de un vehículo Neón, siendo lo que hay que manifestar en los hechos delictuosos de los delitos de homicidio y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército...".

Fundamentos y motivaciones de los actos u omisiones

impugnados:

Como consecuencia del análisis de la queja presentada por "G" (sic) señalada en los antecedentes del asunto; se arriba a la conclusión de que la incriminación que hace hoy la parte quejosa es inverosímil por lo siguiente:

Después del análisis a detalle de la detención se puede concluir que el motivo que la originó se debió a que incurrió en una conducta flagrante descrita como delito bajo el rubro de homicidio, fundamentado en el artículo 123 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército fundamento en el artículo 8 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, esto en menoscabo de la vida de cuatro personas.

Asimismo, se enfatiza el hecho de que dentro de las personas víctimas del homicidio se encontraba un bebé de 3 años.

No se omite manifestar que todo el actuar de los elementos se realizó en flagrancia desde el momento en que se escucharon las detonaciones, aun así existe una llamada al número de emergencias 911 corroborando esto.

De igual forma se informa que con relación al interno "C" no existe registro alguno de su detención por parte de esta autoridad, para lo cual anexo copia simple del formato de actas y reportes con número de folio 8798. Puede advertirse que los internos "A" y "B" ya han tenido problemas con la autoridad en reiteradas ocasiones. Según certificados médicos se pueden advertir varias lesiones leves en los internos "A" y "B", las cuales son relativas al adecuado uso de la fuerza el cual es directamente proporcional a la resistencia al arresto ejercida; cabe resaltar que se encontraban fuertemente armados.

Entonces pues, debe arribarse a la conclusión de que el actuar de los elementos que procedieron en los hechos materia de la queja, al momento de la detención se condujeron respetando en todo momento los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos de dichos quejosos, normatividad a la que alude el artículo 65 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el estado de Chihuahua.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos sean tomadas en consideración las constancias mencionadas con antelación, las cuales se encuentran anexas a este escrito, así como los argumentos esgrimidos.

Por lo que debe concluirse que en su detención y calificación administrativa realizada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, que la falta administrativa (sic), por los cuales fueron remisionados no se vulneraron los derechos humanos, por lo que en consecuencia se deberá pronunciar un acuerdo de no responsabilidad, dado que no existen elementos suficientes para los que se acredite dicha transgresión.”. (Sic)

4. El día 11 de mayo de 2020, se recibió en esta Comisión el oficio número FGES.1/1/418/2020 de fecha 06 de mayo del mismo año, suscrito por el maestro Jesús Manuel Fernández Domínguez, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada y en su carácter de Encargado de la Unidad de Atención y Respuesta a Organismos de Derechos Humanos, mediante el cual rindió el informe de ley, el cual en lo relativo a la queja, contenía las siguientes manifestaciones:

“... I.2. Antecedentes del asunto.

De acuerdo con la información recibida por parte de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Centro y la Dirección de Inspección Interna relativa a la queja interpuesta por los internos “A” y “B”, se informan las actuaciones realizadas por la autoridad:

1. *En primer lugar el agente del Ministerio Público encargado del Departamento Jurídico de la Agencia Estatal de Investigación comunicó a través del oficio FGE-7C/3/2/128/2019 que en ningún momento fueron violentados los derechos humanos de los quejosos “A” y “B” por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, ya que lo cierto es que fueron detenidos por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal el día 17 de junio de 2017, dentro del término de la flagrancia por su probable participación en el delito de homicidio, y fueron puestos*

a disposición del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, lo que dio origen a la carpeta de investigación “H”. De igual manera manifestó que al encontrarse los quejosos “A” y “B” en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en ningún momento fueron sujetos de malos tratos o actos que atentaran contra su integridad física, pues en las diligencias realizadas ante la autoridad fueron asistidos por su defensor.

2. En el mismo sentido, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Centro informó a través de ficha informativa, que se dio inicio a la carpeta de investigación “H” por el delito de homicidio calificado en perjuicio de “J”, “K”, “L” y el menor de seis meses de edad “M”, por hechos que tuvieron lugar el día 17 de junio de 2017, en calles de la colonia “S” de esta ciudad; que fueron puestos a disposición a las 15:30 horas del día 17 de junio de 2017 en calidad de detenidos “A”, “B” y “C”, mismos que fueron detenidos en el término de la flagrancia por parte de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal; que el día 6 de julio de 2018 se llevó a cabo el Juicio Oral número “E” en el que se dictó sentencia condenatoria a “A” y “B” y se les impuso una pena de noventa años de prisión.

3. Por otra parte, el Coordinador de la Unidad de Investigación Especializada de Delitos contra el Servicio Público, el Adecuado Desarrollo de la Justicia, contra la Paz, la Seguridad de las Personas y la Fe Pública, informó que en la Unidad a su cargo se inició la carpeta de investigación “N”, con motivo de la vista realizada por la licenciada “RR” en contra de quien resulte responsable, por el delito de abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública, sin embargo en fecha 21 de agosto de 2018, se realizó acuerdo mediante el cual se declinó la competencia de la

investigación a la Dirección de Inspección Interna para que se continúe con el trámite del asunto.

4. Por último, el agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Inspección Interna comunicó que se radicó la carpeta de investigación “Ñ”, por el delito de tortura, con motivo del oficio 7259/2018 de fecha 06 de julio de 2018, signado por el Juez Presidente del Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Morelos, en relación al Juicio Oral No. “E”, mediante el cual advierte que en audiencia de debate de juicio oral los acusados manifestaron haber sido objeto de actos de tortura por agentes de autoridad aprehensores, asimismo informó que dentro de la investigación se han realizado diversas diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos, encontrándose la carpeta de investigación en la etapa de investigación inicial y/o trámite.

A fin de que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos cuente con los elementos suficientes de convicción, se adjunta al presente informe la siguiente documentación de carácter confidencial, apegándose a los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, consistente en 22 folios.

III. Conclusiones

1. A partir del análisis de los hechos motivo de la queja, de los antecedentes del asunto y de las actuaciones realizadas por la autoridad, de conformidad con las premisas normativas aplicables al caso en estudio, tenemos que la autoridad señala como responsable a la Agencia Estatal de Investigación, la cual niega haber vulnerado los derechos humanos de los quejosos “A” y “B”, pues en primer lugar refiere que su detención fue realizada por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal el día

17 de junio de 2017 dentro del término de la flagrancia por su probable participación en el delito de homicidio, por tal motivo fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, en segundo término se señala que en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en ningún momento fueron sujetos de malos tratos o actos que atentaron contra su integridad física, pues en las diligencias realizadas ante la autoridad fueron asistidos por su defensor.

2. No obstante, en la Dirección de Inspección Interna se dio inicio a la carpeta de investigación “Ñ” para investigar los hechos constitutivos del delito que fueron denunciados por “A” y “B” en la audiencia de debate del Juicios Oral No. “E”.

3. De esta manera, la Fiscalía General del Estado, por conducto de la Unidad de Atención y Respuesta a Organismos de Derechos Humanos, reafirma su decidido compromiso con la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos.

4. Con base en los argumentos antes señalados y bajo el estándar de apreciación del Sistema de Protección no Jurisdiccional, se emite la siguiente posición institucional:

Única: No se tiene por acreditada hasta el momento ninguna violación a los derechos humanos que sea atribuible a elementos adscritos a la Fiscalía General del Estado, toda vez que la Agencia Estatal de Investigación informó que sus elementos no participaron en la detención de los quejosos “A” y “B”, y que en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en ningún momento fueron sujetos de malos tratos o actos que atentaran

contra su integridad física, pues en las diligencias realizadas ante la autoridad fueron asistidos por su defensor...”.

5. Con motivo de lo anterior, este organismo inició el expediente de queja AO 357/2018, para lo cual se llevaron a cabo todas y cada una de las diligencias que de acuerdo con la ley resultaron procedentes así como aquellas que se consideraron pertinentes para allegarse de los elementos de convicción necesarios que le permitieran a esta Comisión emitir un pronunciamiento en relación con la queja de “A” y “B”, razón por la cual a continuación se procede a enunciar las evidencias recabadas durante el procedimiento.

II. - EVIDENCIAS:

6. Queja formulada por “A”, documentada en el acta circunstanciada de fecha 11 de julio de 2018, elaborada por la licenciada Ethel Garza Armendáriz, mediante la cual hizo del conocimiento de esta Comisión hechos que consideró violatorios a sus derechos humanos, la cual ya fue transcrita en el párrafo número 1 del apartado de antecedentes de la presente determinación. (Fojas 1 y 2).
7. Queja presentada por “B”, documentada en el acta circunstanciada de fecha 11 de julio de 2018 elaborada por la Visitadora referida en el párrafo que antecede, mediante la cual hace del conocimiento hechos que consideró violatorios a sus derechos humanos, la cual se encuentra transcrita en el párrafo número 2 del apartado de antecedentes de esta resolución. (Fojas 5 y 6).
8. Evaluación psicológica para casos de posible tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o denigrantes aplicada a los quejosos “A” y “B”, elaborada por el licenciado Fabián Octavio Chávez Parra, psicólogo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de fecha 26 de julio de 2018. (Fojas 15 a 20 y 21 a 26 respectivamente).

9. Oficio número RAMP/DH0061/2018 recibido en fecha 01 de agosto de 2018, en este organismo derecho humanista de fecha 31 de julio de 2018, el cual se encuentra signado por la licenciada Bianca Luz Guadalupe Nevárez Moreno, jefa del Departamento Jurídico de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, mismo que contiene el informe de dicha autoridad y que ya se encuentra transcrito en el punto número 3 del apartado de antecedentes de la presente resolución, conteniendo los siguientes anexos (fojas 27 a la 106):

10.1 Copia simple de una nota periodística del medio de comunicación electrónico “SS”, misma que documentó los hechos que nos ocupan con el encabezado *“Acribillan a familia en Chihuahua, un bebé de tres años muere en el lugar”*, (Fojas 34 a 36).

10.2 Copia simple del reporte de llamada con número de folio 1901.01752511. (Foja 37).

10.3 Copia simple del Informe Policial Homologado con número de folio JCZN585. (Fojas 38 a 56).

10.4 Copia simple de los certificados médicos de entrada y salida de “B” así como de sus antecedentes policiales. (Fojas 57 a 64).

10.5. Copia simple de los certificados médicos de entrada y salida de “A”. (Fojas 65 y 66).

10.4. Copia simple del informe del uso de la fuerza empleado en “A” y “B”. (Fojas 67 y 68).

10.5. Copia simple de la constancia de lectura de derechos que le hicieron a “A”. (Fofas 69 a 71).

10.6. Acta de inventario de bienes asegurados a los quejosos (un arma larga, un arma corta, un teléfono celular y un vehículo Silverado, modelo 2001, marca Chevrolet, color verde placas "O") así como la cadena de custodia de dichos objetos. (Fojas 72 a 94).

10. Oficio No. CERESO01/DG/1009/2018, suscrito por el Lic. Juan Martín González Aguirre, Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, mediante el cual da respuesta al oficio signado por la Visitadora Adscrita a las Áreas de Seguridad Pública y Centros de Reinserción Social, en el cual se le solicitó que se atendiera psicológicamente y de manera urgente a "A", ya que refirió tener ideas suicidas. (Fojas 108 a la 111).
11. Evaluación médica para casos de posible Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Denigrantes practicada a "B", de fecha 22 de agosto de 2018, elaborada por la doctora María del Socorro Reveles Castillo en su carácter de doctora adscrita a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. (Fojas 112 a la 118).
12. Evaluación Médica para casos de posible Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Denigrantes practicada a "A" de fecha 22 de agosto de 2018, signada por la doctora María del Socorro Reveles Castillo adscrita a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. (Fojas 119 a la 126).
13. Informe en vía de colaboración contenido en el oficio No. FGE-23S.3.1.2/6513/2019 de fecha 15 de noviembre de 2019 recibido el 20 de noviembre de 2019 en este organismo derecho humanista, suscrito por el licenciado Guillermo Segura Brenes, Director del Centro de Reinserción Social Estatal No. 1, el cual contiene el siguiente anexo (fojas 145 a 147):

14.1. Copia simple del informe de integridad física o certificado médico de ingreso de las personas privadas de su libertad de nombres "A" y "B".

14. Oficio No. FGE18S.1/1/418/2020 de fecha 11 de mayo de 2020 suscrito por el Mtro. Jesús Manuel Fernández Domínguez, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada, Encargado de la Unidad de Atención y Respuesta a Organismos de Derechos Humanos, mediante el cual rindió el informe de Ley, mismo que fue transcrito en el párrafo número 4 del capítulo de antecedentes de esta resolución, conteniendo los siguientes anexos (fojas 157 a la 181):

15.1 Copia del informe policial homologado y de los certificados médicos realizados a "A" y "B" en las instalaciones de la Comandancia Norte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua. (Fojas 160 a 175).

15.2 Copia de los certificados médicos de ingreso y egreso realizados a "A" y "B" en las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Centro. (Fojas 176 a 179).

15.4. Copia de los certificados médicos de ingreso de "A" y "B", elaborados por el médico en turno del Centro de Reinserción Social Estatal número 1. (Fojas 180 y 181).

III.- CONSIDERACIONES:

15. Esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos es competente para conocer y resolver en el presente asunto atento a lo dispuesto por los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4, párrafo tercero, inciso A, de la Constitución Política del Estado en relación con los artículos 3 y 6, fracciones I y II de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos así como los numerales 6, 12 y 84, fracción III punto a. del Reglamento Interno de este organismo derecho humanista.

16. De igual forma, según lo establecido en los artículos 39 y 40 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, resulta procedente analizar los hechos, los argumentos y las evidencias, así como los elementos de convicción recabados y las diligencias practicadas, a fin de determinar si las autoridades o las personas servidoras públicas violaron o no los derechos humanos de “A” y “B”, al haber incurrido en actos ilegales o injustos, por lo que las pruebas recabadas durante la investigación, deberán valorarse en su conjunto de acuerdo a los principios de la lógica y la experiencia, con estricto apego al principio de legalidad que demanda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16, para que pueda producirse convicción sobre los hechos materia de la queja.
17. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, las quejas solo pueden presentarse dentro del plazo de un año, contado a partir de que se hubiera iniciado la ejecución de los hechos que se estimen violatorios, o de que el quejoso hubiese tenido conocimiento de los mismos, y que solo en casos excepcionales, en tratándose de infracciones graves a los derechos humanos, la Comisión Estatal puede ampliar dicho plazo mediante resolución razonada, en tanto que el artículo 63 fracción I del Reglamento Interno de dicha ley, establece que en los casos a los que se refiere el mencionado artículo 26, sobre la ampliación del plazo de un año para presentar la queja, sólo procederá cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos que se encuentren relacionadas con la libertad, la vida, así como la integridad física y psíquica.
18. Conforme a lo anterior, esta Comisión observa que de acuerdo con las quejas interpuestas por “A” y “B”, se desprende que los hechos ocurrieron el día 17 de junio de 2017, en tanto que la queja, fue interpuesta por aquéllos el día 11 de julio de 2018, es decir, un año y veinticuatro días después de haber ocurrido, lo que de suyo implicaría que las quejas de “A” y “B”, habrían sido presentada en

este organismo, fuera del tiempo establecido en el referido artículo 26 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

19. Sin embargo, del análisis de los hechos narrados por los impetrantes en sus respectivas quejas, y al advertirse que se trata de hechos que por su gravedad, pudieran ser considerados como violaciones a la integridad física y psíquica, es claro que en el caso se actualizan las reglas de excepción previstas en los artículos 26 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y 63 fracción I de su Reglamento Interno, por lo que no se tendrá por computado plazo alguno, siendo esta la razón por la que este organismo se dará a la tarea de analizar el presente asunto, y emitir la resolución correspondiente.

20. Asimismo, se precisa que conforme a lo dispuesto por los artículos 102, apartado B, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracción II y 8, última parte, ambos de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en relación con y el artículo 17 de su Reglamento Interno, este organismo protector de los derechos humanos carece de competencia para conocer de resoluciones de carácter jurisdiccional y para examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo; por lo que esta Comisión no se pronunciará respecto de las actuaciones judiciales y aquellas que tengan que ver con la causa penal incoada a los quejosos, o cualquier otra que se encuentre relacionada con la probable responsabilidad penal de los mismos, por lo que esta Comisión se avocará únicamente al análisis de los actos u omisiones de naturaleza administrativa de las que se desprendan presuntas violaciones a los derechos humanos de "A" y "B".

21. De esta forma tenemos que de la lectura de la queja interpuesta por los impetrantes, se desprende que el motivo de la misma radica en que ambos se duelen de que el día 17 de junio de 2017, fueron detenidos por agentes pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública Municipal que los acusaban de haber cometido un homicidio, de tal forma que al momento de estar ocurriendo

dicha detención fueron golpeados en múltiples ocasiones por los agentes de policía, lo cual continuó en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, esta vez por agentes pertenecientes a esta última dependencia, quienes además los torturaron de forma física y psicológica, poniéndoles cuchillos en el cuello, amenazándolos con hacerle daño a sus familias, haciéndolos firmar declaraciones en contra de su voluntad, poniéndoles bolsas de plástico en la cabeza y trapos mojados en la cara; en tanto que de los informes de las autoridades, se desprende que la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Fiscalía General del Estado se deslindaron de los actos que les atribuyeron los impetrantes en su queja, afirmando estas autoridades que “A” y “B” nunca fueron maltratados ni torturados, señalando que en todo caso algunas de las lesiones que presentaron, se derivaron del empleo del uso de la fuerza que tuvo que ser empleada en ellos al momento de su detención en flagrancia, después de que éstos habían cometido el delito de homicidio en perjuicio de cuatro personas, justificando el uso de la fuerza, en razón de que los quejosos se encontraban fuertemente armados al momento de su detención.

22. Previo a analizar las cuestiones de fondo y las evidencias que obran en el sumario, es necesario conocer las disposiciones legales y los criterios jurídicos que se refieren a la detención en flagrancia, así como aquellas que tienen relación con el tema del derecho a la integridad y seguridad personal, considerando de relevancia las siguientes:

a) El quinto párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público, por lo que deberá existir un registro inmediato de la detención.

b) Los artículos 2, fracción VIII y 21 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Chihuahua establecen respectivamente que la flagrancia es la situación en la que el elemento de la policía municipal presencia la comisión de una infracción, o cuando inmediatamente después de ejecutada ésta, persigue materialmente y detiene al infractor.

c) El artículo 7.3 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos establece que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

d) Los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral y que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, de tal manera que toda persona privada de su libertad deberá ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano respectivamente.

e) El artículo 20 apartado B, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura.

f).- Por otra parte, de conformidad con los artículos 67, fracción IX, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, las personas integrantes de las instituciones policiales, tienen la obligación de hacer uso de la fuerza pública dentro de los límites y en los casos y circunstancias que establece la misma ley en los diversos artículos 266 a 290, los que en resumen determinan que el uso de la fuerza pública, debe:

I. Realizarse estrictamente en la medida que lo requiera el ejercicio de las funciones de los Integrantes de las instituciones policiales.²

II. Ser legal, necesaria, proporcional, racional, y oportuna³.

III. Utilizarse de manera que se evitar la violación de derechos humanos, así como garantizar y salvaguardar la paz y el orden públicos⁴.

i).- Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en su jurisprudencia que existe la presunción de considerar responsable al Estado por las lesiones que exhibe una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales y que en dicho supuesto, recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados⁵.

23. Establecidas estas premisas, se procederá ahora al análisis de las evidencias que existen en el expediente, a fin de establecer si en el caso quedaron demostradas las violaciones a los derechos humanos que adujeron “A” y “B” en su queja, para lo cual se examinará primero la actuación de los agentes de la policía pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y después la de los agentes adscritos a la Fiscalía General del Estado, según el orden cronológico en el que ocurrieron los hechos.

² Artículo 267 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

³ Artículo 267 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

⁴ Artículo 269, fracción II de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

⁵ Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Párrafo 134.

24. En ese tenor, se cuenta en el expediente con el informe de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en el cual esa dependencia señaló que la detención de los quejosos, se debió a que éstos participaron en el homicidio de cuatro personas, según se desprende del informe policial homologado número JCZN585/2017 de fecha 17 de junio de 2017, justificando que si bien era cierto que en los certificados médicos de los quejosos se advertían lesiones leves en sus cuerpos (según se aprecia a fojas 97 a 98 y 104 a 105 del expediente), estas habían sido ocasionadas durante el uso adecuado de la fuerza, la cual había sido empleada en ellos en proporción a la resistencia que habían opuesto al arresto “A” y “B”, destacando además que se encontraban fuertemente armados, acompañando a su informe, el diverso del uso de la fuerza, mismo que se aprecia en la foja 67 del expediente, así como con el acta de inventario de bienes asegurados y su respectiva cadena de custodia que obran a fojas 72 a 75, de los cuales se desprende que a los quejosos se les aseguró un arma larga AK-47 con la serie borrada, un cargador desabastecido y un arma corta tipo escuadra calibre 9 mm, con un cargador desabastecido y un cartucho extraído del arma.
25. También se cuenta con el informe rendido por la Fiscalía General del Estado, en el cual se estableció que con motivo de la detención realizada por los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se aperturó la carpeta de investigación “H”, señalando que mientras los quejosos estuvieron detenidos en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en ningún momento fueron sujetos de malos tratos o actos que atentaran contra su integridad física, pues en las diligencias realizadas ante la autoridad, habían sido asistidos por su defensor. A dicho informe, esa autoridad agregó las evaluaciones de integridad física que se les realizaron a los quejosos al momento de ingresar y egresar de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, según se desprende de las constancias que obran a fojas 146 a 149 del expediente de queja.
26. En relación a los informes rendidos por la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Fiscalía General del Estado, esta Comisión da cuenta de que la primera de las autoridades mencionadas, rindió su informe en el tiempo

establecido en el artículo 33 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, es decir, en el término de 15 días naturales, ya que dicha dependencia recibió la solicitud de este organismo para rendirlo, el día 18 de julio de 2018, y la respuesta se recibió el día 1 de agosto del mismo año, habiendo transcurrido 14 días.

27. Por lo que hace a la Fiscalía General del Estado, esta Comisión advierte que no ocurrió lo mismo con el informe rendido por esta dependencia, ya que recibió la petición de informes de este organismo, el día 17 de julio de 2017, y fue recibida en este organismo, hasta el día 11 de mayo de 2020, es decir, dos años y diez meses después, no obstante que esta Comisión le envió cinco recordatorios mediante los oficios VG4 450/2019, VG4 518/2019, VG4 552/2019, 10s.1.4.015/2019 y 10s.1.4.086/2019, de fechas 25 de septiembre, 31 de octubre, 25 de noviembre de 2019 y 12 de marzo de 2020 respectivamente, por lo que respecto de esta autoridad, además de las consideraciones que se realicen al momento de analizar las evidencias que obran en el expediente, acorde a lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en relación con el 79 de su Reglamento Interno, esta Comisión considera que la consecuencia de que la autoridad no haya remitido los informes correspondientes en relación a las quejas interpuestas en su contra, es que deban tenerse por ciertos los hechos materia de las mismas, además de que la omisión de la autoridad de rendir su informe en tiempo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6, fracción VI de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, este organismo considera pertinente dar vista de la presente determinación a la Fiscalía Especializada en Violaciones a Derechos Humanos, para que en lo subsecuente rindan de manera integral los informes que le son solicitados a la Fiscalía General del Estado, con motivo de las investigaciones que se siguen en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pues dicha propuesta redundará en una mejor protección de los derechos humanos.

28. Ahora bien, haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 39 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el cual permite que este organismo derecho humanista valore las pruebas en su conjunto, de acuerdo con los principios de la lógica y de la experiencia, tenemos que del análisis de los hechos narrados por los quejosos y de los informes rendidos por las autoridades, concatenados con las evidencias consistentes en los certificados médicos de lesiones de los impetrantes que fueron aportados por las partes, se deduce que “A” y “B” efectivamente fueron detenidos por agentes pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública Municipal el día 17 de junio de 2017, aunque no en las circunstancias en las que narraron los impetrantes, es decir, sin motivo aparente, ya que de los informes de las autoridades y de la documentación que acompañaron al mismo, se desprende que diversos elementos la policía municipal recibieron un reporte vía telefónica al número 911 (según consta a foja 37 del expediente), en el que se denunciaba una agresión con armas de fuego a diversas personas, evento que se suscitaba en las inmediaciones de las calles “NN” y “S” esta ciudad, muy cerca de las instalaciones de un Centro de Diversiones para Policías (CEDIPOL) que se ubica por las mismas calles, por lo que de inmediato acudieron a atender el evento, movilizándose vía terrestre y vía aérea (por medio de un helicóptero), verificando que efectivamente se estaba efectuando un ataque con armas de fuego a diversas personas que se encontraban a bordo de un vehículo Neón de color blanco, en cuyo interior habían quedado sin vida tres personas, y otra más tendida en la calle a pocos metros del citado vehículo.

29. De dichas evidencias también se desprende que los agentes del orden, procedieron a ubicar a los agresores, quienes de acuerdo con sus informes, habían emprendido la huida en dos vehículos, siendo estas una persona en una camioneta blanca y otras dos en una camioneta verde, girando la primera hacia el lado izquierdo y la segunda hacia el lado derecho por la calle “S”, siendo esta última camioneta a la cual le dieron seguimiento continuo los agentes de policía, sumándose a su persecución al menos cuatro unidades más, las cuales nunca la perdieron de vista, y que llegado a un punto, los tripulantes del vehículo

descendieron de la misma, quienes a la postre resultaron ser “A” y “B”, los cuales fueron detenidos a la altura de la calle “KK” y “JJ” de la colonia “P”, asegurándose posteriormente el vehículo que tripulaban, así como las armas a las que se hizo referencia en el párrafo 21 de la presente determinación, las cuales de acuerdo con la narración de la actuación del primer respondiente que hizo el Informe Policial Homologado número JCZN585/2017, el cual obra a fojas 47 a 49 del expediente, fueron arrojadas por éstos en un bulto mientras eran perseguidos por la policía.

30. Al respecto, esta Comisión considera que del análisis de dichas evidencias, se encuentra plenamente justificada la intervención de los agentes pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ya que actuaron en el término de la flagrancia y emplearon el uso de la fuerza en la forma en la que lo establecen los artículos 67 fracción IX, 266 y 267 la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, es decir, en la medida requerida por esos dispositivos legales, de forma legal, necesaria, proporcional, racional, oportuna y siendo utilizada de una manera que garantizaron y salvaguardaron la paz y el orden públicos, pues ambos quejosos fueron detenidos como presuntos partícipes de cuatro homicidios, en los que para perpetrarlo se utilizaron armas de fuego, de tal manera que los agentes del orden, no podían tener la seguridad de que los quejosos se encontraran desarmados en los momentos previos a su detención, considerando este organismo que las lesiones que presentaron “A” y “B” en un principio, las cuales fueron documentadas en los certificados médicos de ingreso que se les realizaron a éstos en la Comandancia Norte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, tales como dermoabrasiones en ambas muñecas así como lesiones equimóticas en cuello, efectivamente, tal y como lo refirieron respectivamente la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Fiscalía General del Estado en sus informes, son compatibles con las maniobras propias de sujeción, empleadas en el uso legítimo de la fuerza.

31. Esto último se ve robustecido con los certificados médicos de entrada de “A” y “B” elaborados por el médico adscrito a la Dirección de Seguridad Pública

Municipal, quien el día 17 de junio de 2017, a las 15:19 horas certificó el estado de salud de “A”, y el mismo día, pero a las 15:14 horas, lo hizo en el caso de “B”, (fojas 97 y 104 del expediente respectivamente), en los que claramente se advierte que a partir de que “A” y “B” fueron ingresados a las celdas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, éstos presentaban diversas lesiones compatibles con el sometimiento del uso legítimo de la fuerza, ya que por ejemplo “A”, presentó lesiones equimóticas en la circunferencia de su cuello, así como en la región frontal derecha y hematomas en el cuello posterior, por contusiones al momento de su detención; mientras que “B”, presentó lesiones equimóticas de bordes mal definidos en las regiones lumbares izquierda y derecha, así como abdominales a nivel de flancos y tórax posterior, a nivel de vértebras torácicas por contusiones al momento de su detención; lo cual concuerda con el informe del uso de la fuerza que obra en la foja 67 del expediente, en el cual se estableció que la fuerza se empleó en los quejosos mediante el uso la presencia policial, verbalización, control de contacto, control físico, comandos verbales y candados de mano, para después ser trasladados a la Comandancia Norte para su remisión, y posteriormente a la Fiscalía General del Estado Zona Centro.

32. De ahí que esta Comisión considere que en cuanto a las lesiones que les fueron ocasionadas a los quejosos al momento de su detención por parte de los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se encuentran debidamente justificadas, ya que conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecida en las premisas de la presente determinación, este organismo determina que la autoridad municipal proveyó una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido, y desvirtuó las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante los elementos probatorios adecuados.

33. Sin embargo, este organismo protector de derechos humanos advierte que después de que los quejosos fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado por parte de los elementos pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, “A” y “B” presentaron otras lesiones que no fueron documentadas en los certificados médicos de entrada que se les

hicieron en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, tan es así que en las fojas 176 y 177 del expediente, obran los informes médicos que le hicieron a los quejosos en la Fiscalía General del Estado el mismo día, es decir, el 17 de junio de 2017 a las 16:00 horas y a las 16:20 horas de ese día, en los cuales se documentó que a su ingreso a las instalaciones de dicha Fiscalía, "A" ya contaba con otras lesiones además de las documentadas inicialmente, tales como un edema y un eritema en la región posterior de la región cervical, un ligero edema en el tercio medio de la región torácica derecha, edema de ambos brazos en el tercio medio y una equimosis en el tercio distal de ambos antebrazos por la presión de los candados de mano que se le pusieron; en tanto que "B", presentó una equimosis en la cara lateral del cuello del lado derecho, equimosis rojiza en región dorsal línea media de 4 centímetros de diámetro, equimosis en región lumbar del lado derecho de 5 centímetros de diámetro, una escoriación dérmica en antebrazo derecho del tercio medio de 10 centímetros de diámetro aproximadamente, y además refirió tener un dolor en la rodilla derecha, supuestamente al darse a la fuga en el monte, es decir, a escasa media hora o una hora de que se emitieron los certificados médicos de integridad física de egreso de los quejosos, elaborados en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en los cuales se documentó que traían las mismas lesiones con las que habían ingresado a dicha dependencia, lo cual evidentemente es contradictorio con los certificados médicos de ingreso que realizó la Fiscalía General del Estado.

34. A lo anterior se suma el hecho de que mientras los quejosos estuvieron detenidos en las instalaciones de la Fiscalía de Distrito, lo cual de acuerdo con las evidencias analizadas abarca al menos de las 15:30 horas del día 17 de junio de 2017, a las 12:10 horas del día 19 de junio de 2017, según los documentos que obran a fojas 176 a 179 del expediente, relativos a los informes de integridad física de "A" y "B", ambos presentaban un sinnúmero de lesiones, que exceden en mucho las que les fueron apreciadas a su ingreso por en la Dirección de Seguridad Pública Municipal y en la Fiscalía General del Estado, ya que por ejemplo "A", a su egreso de la Fiscalía General del Estado, presentó equimosis

rojizas de formas y longitud variables en la región cervical posterior de su cuerpo, así como equimosis violáceas en ambos pabellones auriculares, equimosis rojizas lineales en región interior del cuello de predominio izquierdo con dermoabrasión central semi lunar de una longitud aproximada de 1 centímetro, equimosis rojiza petequial en región pectoral superior, otra de la misma presentación en hipocondrio derecho, escoriaciones lineales superficiales de longitud variable en ambos antebrazos y en brazo izquierdo y escoriaciones con equimosis rojizas semicircunferencias en ambas muñecas a nivel de caras internas y externas; en tanto que “B”, presentó equimosis violáceas en ambos pabellones auriculares, dermoabrasiones lineales en región lateral izquierda inferior de cuello, zonas de equimosis rojizas en la región vertebral y paravertral bilateral a nivel de dorso lumbar, escoriación en región escapular izquierda, equimosis verdosa lineal en cara posterior de brazo izquierdo tercio medio y otra de la misma presentación en brazo derecho, flanco derecho, al nivel de la línea media axilar que se extiende hasta región de la cresta iliaca, dos dermoabrasiones lineales en la región del tercio medio, cara anterior del antebrazo derecho de 10 centímetros de longitud y en el tercio distal de cara anterior de brazo izquierdo, así como equimosis circulares en tercios distales de ambas piernas.

35. Cabe señalar que también son contradictorios los certificados médicos que se les realizaron a los quejosos al momento en que ingresaron al Centro de Reinserción Social Estatal número 1, los cuales fueron elaborados a las 15:06 y 15:09 horas del día 19 de junio de 2017, es decir, tres horas después de que egresaron de la Fiscalía General del Estado, pues según consta en la foja 146 del expediente, en lo relativo a “A”, se hizo constar por el médico adscrito a dicho centro, que éste presentaba una dermoabrasión en la región lateral del cuello bilateral y un estrabismo que no comprometía su visión, pero sin referir ninguna otra de las múltiples lesiones que se detallaron en los certificados anteriores; y en lo relativo a “B”, se reitera la incongruencia en el contenido de su certificado, ya que al iniciarse su valoración médica, se estableció que se encontraba policontundido, pero asentando únicamente que presentaba una contusión en el

dorso, región de flanco derecho y rodilla izquierda, con extravismo crónico con dilopia, antecedentes de hepatitis C y refiriendo antecedentes de ansiedad, sin guardar correspondencia con el largo listado descriptivo de las lesiones que presentó “B” al salir de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

36. Por lo anterior, y tomando en cuenta precisamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relativa a que la autoridad debe proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido, así como desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad mediante los elementos probatorios que considere adecuados en tratándose del estado de salud y/o integridad física de las personas que tiene bajo su custodia, esta Comisión considera que la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Fiscalía General del Estado no justificaron las lesiones que presentaron “A” y “B” después de su detención y posterior estancia y egreso de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Fiscalía General del Estado, es decir, aquellas adicionales que no fueron documentadas como resultado del uso de la fuerza que tuvo que ser empleado en ellos cuando fueron detenidos, ya que en sus informes, no proporcionaron al menos una explicación de los motivos por los cuales los quejosos presentaron más lesiones a su egreso que a su ingreso en sus respectivas dependencias, ni tampoco explicaron el motivo por el cual el médico adscrito al Centro de Reinserción Social, documentó menos lesiones de las que había reportado la Fiscalía General del Estado, todo lo cual lleva a esta Comisión a concluir, en base a lo dispuesto por los artículos 39 y 40 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, valorando las evidencias en su conjunto y haciendo uso de los principios de la lógica y de la experiencia, que existen indicios más que suficientes para determinar que las afirmaciones de los quejosos, en el sentido de que fueron objeto de golpes y malos tratos por parte de elementos pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Fiscalía General del Estado, tienen sustento.

37. Esto es así, porque además se cuenta en el expediente con los Dictámenes Psicológicos Especializados para Casos de Posible Tortura y otros Tratos o

Penas Cruelles elaborados por el licenciado Fabián Octavio Chávez Parra, psicólogo adscrito a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, los cuales le practicó a “A” y “B”, mismos que obran a fojas 15 a 19 y 21 a 25 respectivamente, así como con sus evaluaciones médicas para Casos de Posible Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, elaboradas por la doctora María del Socorro Reveles Castillo, adscrita a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el día 22 de agosto de 2018, las cuales obran a fojas 112 a 126 del sumario.

38. Del estudio de dichas evidencias, el psicólogo adscrito a esta Comisión, determinó que en lo que respecta a “A”, en base a la entrevista practicada, las pruebas psicológicas aplicadas y el análisis de la declaración del entrevistado, la relatoría de los hechos, los rasgos fisionómicos que mostraba, además de los resultados de las escalas y las características físicas de comportamiento en el proceso su entrevista, éste se encontraba afectado emocionalmente por los hechos que derivaron en su detención, ya que de acuerdo con su evaluación y según el apartado de *“quejas psicológicas actuales”* de la evaluación en estudio, se incluían la de temer que los agentes cumplieran sus amenazas contra su familia y les fueran a hacer algo, mencionando que batallaba mucho para dormir en las noches y que tenía frecuentemente pesadillas, expresando que cuando veía Fiscales se ponía muy nervioso y temía que le fueran a hacer algo, refiriendo que casi no comía por la falta de apetito, agregando que cuando estaba en su celda en “Previas”, se quitó la playera para hacerla nudo en su cuello y buscar la forma de ver donde la colgaba, pero que en ese momento pensó en su familia y renunció a la acción de colgarse, señalando que dentro del penal también le ha pasado por su mente suicidarse, pero que al pensar en su familia se le pasa la idea.

39. Asimismo, de la evaluación médica elaborada el 15 de agosto de 2018 por la doctora María del Socorro Reveles Castillo, adscrita a este organismo derecho humanista, la cual fue elaborada trece meses después de la detención de “A”, se desprende que éste aún contaba con indicios visibles en su cuerpo, de los malos tratos físicos que dijo haber sufrido, ya que en dicha evaluación se asentó que

presentaba “...una mancha hipercrómica en brazo derecho, cicatrices lineales en brazos y rodillas compatibles con lesiones superficiales tipo escoriación, múltiples cicatrices superficiales lineales en ambas muñecas que concuerdan con excoriaciones causadas por el uso de esposas muy apretadas, así como mancha hipercrómica en cara posterior de muslo izquierdo...”, concluyendo su evaluación señalando que “... 1.- Las manchas hipercrómicas (oscuras) que se observan en brazo izquierdo y ambas piernas, concuerdan con hiperpigmentación postraumática (por golpe contuso). 2.- Las múltiples cicatrices lineales que presenta en brazos y rodillas concuerdan con las lesiones superficiales tipo escoriación. 3.- Las cicatrices lineales alrededor de ambas muñecas concuerdan con excoriaciones causadas por el uso de esposas muy apretadas. 4.- Las equimosis que refiere haber presentado no se observan al momento de la revisión. Por el tiempo transcurrido podrían haberse resuelto de forma espontánea. 5.- Se sugiere revisar el examen médico realizado al ingreso al Centro de Reinserción Social 1...”; con lo cual se corroboran los dichos del quejoso en el sentido de que fue sometido a diversas formas de malos tratos.

40. Especial análisis merece el caso de “B”, ya que por lo que hace a la evaluación que se hizo de su persona por parte del licenciado Fabián Octavio Chávez Parra, en su carácter de psicólogo adscrito a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el citado profesionista estableció que éste contaba con un estado mental normal y un cuadro ansioso con un nivel de intensidad moderada, pero sin cumplir con los criterios para el diagnóstico de estrés postraumático, así como un inventario de depresión moderada, llegando a la conclusión de que su estado emocional era estable, al no existir indicios que mostraran que el entrevistado hubiere sido afectado por el proceso de malos tratos que refirió haber vivido al momento de su detención; en tanto que en la evaluación médica que se llevó a cabo por la doctora María del Socorro Reveles Castillo, adscrita a este organismo derecho humanista, elaborada el día 15 de agosto de 2018, concluyó que “B”: “...1.- En el momento de la revisión no existen lesiones ni cicatrices visibles atribuibles al evento relatado; por el tiempo de evolución, las lesiones y los síntomas que refiere (hinchazón, equimosis, dolor, etc.) pudieron

haberse resuelto de manera espontánea. 2.- Se sugiere revisar examen médico realizado al ingreso al Centro de Reinserción Social 1...”.

41. Del análisis de las evaluaciones físicas y psicológicas que se le realizaron a “B”, podría considerarse a primera vista, que éste no sufrió los actos de violencia que refirió en su queja; sin embargo, de un análisis más a fondo de dichas evaluaciones, podemos determinar que esto no es así.
42. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en su jurisprudencia, que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas, es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado, que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad, según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta, ya que los primeros se refieren a las características del trato, tales como la duración, el método utilizado o el modo en que fueron infligidos los padecimientos, así como los efectos físicos y mentales que estos pueden causar; en tanto que los segundos, se remiten a las condiciones de la persona que padece dichos sufrimientos, entre ellos la edad, el sexo, el estado de salud, así como toda otra circunstancia personal.⁶
43. Asimismo, el párrafo 161 del Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, mejor conocido como “Protocolo de Estambul”, establece que las pruebas físicas, en la medida en que existan, son importantes informaciones que confirman que la persona ha sido torturada, pero que de todas formas, en ningún caso debe considerarse que la ausencia de señales físicas, sea indicativo de que no se ha producido tortura, ya que es frecuente que estos actos de violencia contra las personas, no dejen marcas ni cicatrices permanentes.

⁶Caso Norín Catrimán y otros (dirigentes, miembros y activista del pueblo indígena mapuche) vs. Chile. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Fondo, reparaciones y costas. Párrafo 388.

44. Tomando en cuenta lo anterior, de la evaluación psicológica que se hizo de “B”, (foja 23 del expediente), tenemos que en el apartado de “Quejas psicológicas actuales”, se estableció que “... *El entrevistado refiere que padece dolores de cabeza frecuentes y tiene dificultad para caminar, esto ocasionado por los golpes recibidos en la detención. Refiere que ve sombras y cosas en su celda, y dice que batalla para dormir por pensar en su encierro, refiere que ya le fregaron la vida, menciona que por lo que vivió cuando lo detuvieron, ya le perdió el miedo a los golpes...*”.

45. Como puede observarse y analizando dicha evidencia a la luz de los artículos 39 y 40 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de acuerdo con los principios de la lógica y la experiencia, fundándonos en la documentación y las pruebas que obran en el propio expediente, es claro que en el caso de “B”, deben tomarse en consideración los factores endógenos y exógenos propios de la situación que vivió “B” en lo particular, es decir, durante su detención y en los momentos posteriores a ella, así como los rasgos característicos de su personalidad, pues el hecho de que en sus evaluaciones médicas y psicológicas no se hayan apreciado las secuelas o las huellas que le pudieron haber dejado los actos de violencia que dijo haber sufrido, no significa que no hubiere sido víctima de ello, pues si bien es cierto que en su evaluación psicológica se concluyó que “B” tenía un estado mental normal, sin cumplir con los criterios para el diagnóstico de estrés postraumático, y que su estado emocional era estable, en razón de que no había indicios que mostraran que el entrevistado hubiere sido afectado por el proceso de malos tratos que refirió haber vivido al momento de su detención, cierto es también que la personalidad de “B”, es muy diferente a la de “A”, tan es así que “B”, manifestó en su entrevista que incluso ya le había perdido el miedo a los golpes, lo cual sin duda ha ocasionado que actualmente padezca dolores de cabeza frecuentes y que presente una dificultad para caminar debido a los golpes recibidos durante su detención, lo cual evidentemente es una consecuencia de las lesiones y los dolores que dijo tener en sus rodillas, según se analizó ya en los párrafos 29, 31 y 35 de la presente determinación.

46. Además, no debe olvidarse que “B” presentó lesiones distintas a las de su detención, después de que egresó de la Comandancia Norte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y al momento de ingresar y egresar de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, las cuales se encuentran debidamente documentadas, sin que ninguna de esas autoridades proporcionara una explicación de las nuevas lesiones que aparecieron en el cuerpo de “B”.
47. Es por ese motivo que esta Comisión, afirma que existen elementos suficientes para considerar que los dichos de “A” y “B” en sus respectivas quejas, encuentran sustento en las evidencias que se han analizado hasta este punto, al existir fuertes indicios para establecer con un alto grado de probabilidad, que los quejosos fueron sometidos a malos tratos físicos y psicológicos durante su estancia en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y/o en la Fiscalía General del Estado.
48. También llama la atención que de acuerdo con el informe de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, los agentes pertenecientes a esta dependencia, afirmaron que después de los homicidios en los que presuntamente participaron los quejosos, nunca los perdieron de vista, siendo esta la razón por la cual iniciaron su persecución y fueron detenidos en flagrancia, de tal manera que esta Comisión, haciendo uso de los principios de la lógica y la experiencia, según lo permite el artículo 39 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, considera que no hace sentido que los quejosos hubieran sido golpeados y sujetos de malos tratos físicos y psicológicos durante su estancia en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y/o en la Fiscalía General del Estado, con la intención de obtener de ellos una confesión o información relacionada con los hechos en los que presuntamente acababan de participar, cuando que los agentes pertenecientes a la primera de las dependencias mencionadas, nunca los perdieron de vista después de que

presuntamente habrían participado en los mencionados homicidios, y por lo tanto, ya no existía la necesidad de obtener de ellos una confesión.

49. Por lo anterior, y en vista de que este organismo no cuenta con evidencias que permitan establecer con certeza el momento y el lugar en el que se les propinaron a los impetrantes, los golpes y los malos tratos que alegaron haber recibido mientras estuvieron detenidos, esta Comisión determina que lo procedente es que la presente resolución se dirija a la Dirección de Seguridad Pública Municipal y a la Fiscalía General del Estado, con la finalidad de que en sus respectivos ámbitos de su competencia, asuman las responsabilidades administrativas que se describirán en el capítulo correspondiente de la presente determinación.

50. Por lo anterior, y al haber quedado demostrado que las diversas lesiones que presentaron los impetrantes con posterioridad a su detención en flagrancia, las cuales no corresponden a las que son propias del sometimiento y que no fueron explicadas o justificadas por las autoridades denunciadas por los impetrantes, lo procedente es que dichas autoridades investiguen y sancionen las violaciones a los derechos humanos de "A" y "B", se procure el restablecimiento de los derechos que les fueron vulnerados, y en su caso, se les repare el daño, tal y como se considerará a continuación.

IV.- RESPONSABILIDAD:

51. Por lo que hace a la responsabilidad administrativa del personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal y a la Fiscalía General del Estado, generada con motivo de las violaciones a los derechos humanos analizados y conforme a las evidenciadas analizadas en la presente resolución, ésta corresponde a los actos realizados por los agentes pertenecientes a dichas corporaciones que hubieren participado en los hechos que narraron los quejosos, al haber quedado evidenciado que contravinieron las obligaciones contenidas en los artículos 7, fracción I y VII y 49, fracción I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las disposiciones legales contenidas en los

artículos 65 fracciones I, X, XVII y XXV, 67, fracción IX y 173, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, mismas que prevén que las personas servidoras públicas observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, actuando conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas correspondientes a su empleo, cumpliendo con sus funciones y atribuciones encomendadas, además de observar un trato respetuoso con las personas, absteniéndose de todo acto arbitrario, abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, aun cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra, denunciando inmediatamente tales hechos a la autoridad competente, informar inmediatamente al superior jerárquico de las omisiones, actos indebidos o constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica y abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de la Institución, dentro o fuera del servicio, para lo cual habrán de iniciarse y tramitarse los procedimientos administrativos que correspondan conforme a las disposiciones legales invocadas en contra de los servidores públicos que hubieren participado en los hechos que denunciaron los quejosos.

52. De esta forma, en lo que corresponde a la responsabilidad de Fiscalía General del Estado, es trascendente referir que independientemente de que esta Comisión da cuenta de que en la foja 10 del expediente, obra el oficio CHIH AO 363/2018, de fecha 16 de junio de 2018, en el cual el Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito en Zona Centro, afirmó que realizaría las investigaciones pertinentes por el delito de tortura denunciado por los quejosos, y que de acuerdo con el oficio número 7259/2018, de fecha 6 de julio de 2018, signado por el Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Morelos, en relación al Juicio Oral número "E", se advierte que la Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación número "N", por el delito de tortura cometido en perjuicio de "A" y "B", así como la diversa carpeta de

investigación número “I”, por el delito abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública, según el informe rendido por la Fiscalía General del Estado que obra en la foja 158 del expediente, los cuales ambos se encuentran en etapa de investigación inicial; esta Comisión considera que dicha dependencia, satisface la obligación abrir una investigación con motivo de los hechos denunciados por los quejosos.

53.No obstante lo anterior, lo procedente es que en todo caso, esta Comisión recomiende a la Fiscalía General del Estado, que las carpetas de investigación señaladas en el párrafo que antecede, sigan tramitándose hasta su total conclusión.

V.- REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO:

54.Una vez identificados los perjuicios físicos y psíquicos que recayeron en los impetrantes como consecuencia de las violaciones a sus derechos humanos, se considera que en el caso, los quejosos tienen derecho a la reparación integral del daño por los hechos que denunciaron, en los términos en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en su jurisprudencia, en base a la obligación que tiene el Estado de reparar las violaciones a los derechos humanos, así como los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular hubiere causado en los bienes o los derechos de las personas, teniendo el particular el derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos establecidos en los artículos 1 párrafo tercero, 109, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 178, fracción III y fracción VI cuarto párrafo de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.

55.De esta forma, la Recomendación formulada debe incluir las medidas efectivas de restitución a los quejosos en sus derechos fundamentales y las relativas a la reparación de los daños y perjuicios que se les hubieren ocasionado en términos de los artículos 1, 3, fracción I, 4, 6, 7 fracciones I, IV, V, VI, VIII, XVI, XVII y XIX, 10, 11 fracciones I, V, VI, VII, IX, X, XIV, 13, 14, 20 fracciones II, V, VII, XVI, XVII,

XVIII, XX, XXIII, XXXIII y 22 a 37 de la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua, para lo cual la autoridad deberá repararle el daño a los quejosos de manera integral por las violaciones a sus derechos humanos, las cuales se precisarán a continuación, así como realizar su inscripción ante el Registro Estatal de Víctimas, conforme a los siguientes lineamientos:

55.1. Medidas de rehabilitación: Como medidas de rehabilitación, la autoridad deberá brindarle a “A” y “B” de forma gratuita, la atención médica, psicológica y psiquiátrica especializada que requieran con motivo de los hechos que derivaron en la violación de sus derechos humanos, o bien, el pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que sean necesarios para la recuperación de su salud física y psíquica, verificando que la atención que se les brinde sea la adecuada y acorde a las afectaciones que tengan al momento de dárseles la atención.

55.2. Asimismo, se les deberán proporcionar todos los servicios y la asesoría jurídica gratuita que sea necesaria y tendente a facilitar el ejercicio de sus derechos como víctimas, garantizando su disfrute pleno y tranquilo en todos los procedimientos administrativos y penales en los que sean parte y que tengan relación con las denuncias que presentaron “A” y “B” en contra de las autoridades.

55.3 Medidas de satisfacción: Debe considerarse que la presente recomendación constituye por sí misma una forma de reparación como medida de satisfacción. Sin embargo, aún queda pendiente la iniciación de los procedimientos administrativos correspondientes por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la conclusión de los procedimientos penales iniciados por la Fiscalía General del

Estado, por lo que dichas autoridades deberán iniciar y concluir en sus respectivas dependencias, los procedimientos que se encuentren relacionados con los hechos denunciados por los quejosos, tomando en cuenta las evidencias, las consideraciones y los lineamientos establecidos en la presente resolución.

55.4. Medidas de no repetición: Estas consisten en implementar las medidas que sean necesarias para conseguir que los hechos violatorios de derechos humanos no se repitan y contribuir a su prevención; por ello, el Estado y sus autoridades deben adoptar todas las medidas legales y administrativas para hacer efectiva la garantía de que todos los actos administrativos se ajusten a las normas nacionales e internacionales relativas a la competencia, independencia e imparcialidad de las resoluciones y las garantías del debido proceso.

55.5. De tal manera que por lo que hace a los funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Fiscalía General del Estado, deberán instruir a sus agentes policiacos y de investigación, para que se abstengan de infligir o tolerar actos de que atenten contra la integridad física o psíquica de las personas que sean detenidas, aun y cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, como la amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra, y asimismo, para que desde su formación inicial se les capacite manera permanente y continua en la ética policial y en el respeto de los derechos humanos, tal y como se encuentra previsto en el artículo 287 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para lo cual deberán remitir a esta Comisión las pruebas que permitan establecer que

se giraron dichas instrucciones y que se les capacita en estas materias.

56. De esta forma la Comisión Estatal de los Derechos Humanos considera que a la luz del sistema de protección no jurisdiccional, existen evidencias suficientes para considerar como vulnerados los derechos humanos a la integridad física y psíquica de los quejosos, y en consecuencia, lo procedente es que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 y 44 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como los numerales 84, fracción III, inciso a), 91, 92 y 93 del Reglamento Interno de esta Comisión, resulta procedente emitir las siguientes:

VI.- RECOMENDACIONES:

A ustedes **Mtra. María Eugenia Campos Galván, Presidenta Municipal de Chihuahua y Mtro. César Augusto Peniche Espejel, Fiscal General del Estado:**

PRIMERA.- Para que provean lo necesario a fin de que se repare integralmente el daño causado a “A” y “B”, de manera oportuna, plena, integral y efectiva, como consecuencia de las violaciones a sus derechos humanos, en los términos precisados en los párrafos 55 a 55.3 de la presente Recomendación.

SEGUNDA.- En un plazo que no exceda de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente a la aceptación de la presente resolución, se lleven a cabo las gestiones para que se inscriba a las personas impetrantes en el Registro Estatal de Víctimas, por violación a sus derechos humanos, y remitan las constancias que así lo acrediten.

TERCERA.- Dentro del ámbito de su competencia, inicien, integren y resuelvan conforme a derecho los procedimientos administrativos y penales en contra de las personas servidoras públicas adscritas a la Agencia Estatal de Investigación, antes Policía Estatal Única División de Investigación y de la

Dirección de Seguridad Pública Municipal que hubieren participado en los hechos que se analizaron en la presente Recomendación, tomando en consideración las evidencias y razonamientos esgrimidos en la presente resolución, remitiendo a esta Comisión las constancias con que las que se acredite Se continúen hasta la resolución que corresponda, las carpetas investigación “N” e “I” que inició la Fiscalía General del Estado por los delitos de tortura, abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública en perjuicio de “A” y “B”, en contra de las personas servidoras públicas que participaron en los hechos denunciados por éstos.su cumplimiento.

CUARTA.-

La presente recomendación, de acuerdo con lo señalado por el artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y con tal índole se encuentra en la Gaceta de este organismo, y se emite con el propósito fundamental, tanto de hacer una declaración respecto a una conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualesquiera otras autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trata.

Las recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no pretenden en modo alguno desacreditar a las instituciones, ni constituyen una afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, por el contrario, deben ser concebidas como instrumentos indispensables en las sociedades democráticas y en los estados de derecho para lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridades y servidores públicos ante la sociedad.

Dicha legitimidad se robustecerá de manera progresiva cada vez que se logre que aquéllas y éstos, sometan su actuación a la norma jurídica y a los criterios de justicia que conlleven el respeto de los derechos humanos.

En todo caso, una vez recibida la recomendación, la autoridad o servidor público de que se trata informará dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si se acepta dicha recomendación.

Entregará, en su caso, en otros quince días adicionales las pruebas correspondientes de que ha cumplido con la recomendación, según lo establecido en el artículo 44 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos vigente en el Estado de Chihuahua.

La falta de respuesta dará lugar a que se interprete que la misma no fue aceptada. En caso de que se opte por no aceptar la presente recomendación, le solicito en los términos del artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que funde, motive y haga pública su negativa.

No dudando de su buena disposición para que sea aceptada y cumplida.

ATENTAMENTE

NESTOR MANUEL ARMENDÁRIZ LOYA

PRESIDENTE

c.c.p.- Quejosos, para su conocimiento.

c.c.p.- Mtro. Jair Jesús Araiza Galarza, Secretario Técnico Ejecutivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

c.c.p.- Lic. Francisco González Arredondo. Titular de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Violaciones a Derechos Humanos, para los efectos y de acuerdo con las consideraciones precisadas en los puntos 25 a 27 de la presente Recomendación.